



A 5 años del
20 de diciembre

Qué pasó Qué cambió Qué quedó

El 19 y 20 de diciembre de 2001 una movilización popular espontánea puso punto final al gobierno de Fernando de la Rúa. Pero los significados de esos días iban mucho más allá: estaban poniendo en tela de juicio un modelo económico, un sistema político y los paradigmas que habían primado durante tres décadas.

Escriben: *Edgardo Mocca, Mario Wainfeld, Silvia Bleichmar, Nicolás Casullo, Horacio González, Hugo Calello, Colectivo Situaciones, Maristella Svampa y Adriana Meyer*

No hubo guerra civil ni el dólar llegó a diez pesos, pero tampoco fue barrida la clase política e instalada una asamblea constituyente. Quedó la presencia latente de la movilización y la protesta popular, que hizo que la democracia recuperara su condición de contrato político y social.



Las promesas incumplidas

Por **Edgardo Mocca ***

Para bien o para mal, ni las promesas ni las amenazas de ese hoy tan lejano diciembre argentino no se cumplieron. No se desató en el país una guerra civil ni fue necesaria la intervención de virtuosos comités internacionales para administrar su quiebra financiera y política; el dólar no llegó a costar diez pesos ni se esfumó la soberanía monetaria tal como profetizaba (e impulsaban) los partidarios de la “dolarización”, corresponsables centrales del colapso bruscamente instalados en el lugar de consejeros para su reconstrucción. No tuvo lugar el clásico episodio autoritario destinado a recuperar el orden en las calles, cuestionado por la turba indignada. Argentina no salió de su crisis por el camino que soñaba la derecha.

Claro que tampoco fue barrida la clase política “venal, incapaz e irrepresentativa” por el viento purificador del pueblo. No hubo una asamblea constituyente refundadora de la democracia auténtica, malversada por los políticos. Las asambleas populares que entonces nacieron no se constituyeron en gérmenes de un poder auténticamente popular. Los políticos son (casi) los mismos; el artículo 22 de la Constitución que consagra el carácter representativo de nuestra democracia no ha sido derogado. Otro modo de la desilusión: en este caso “de izquierda”.

Las revoluciones (o contrarrevoluciones) que no se consuman dejan siempre un regusto amargo en la boca; una sensación de oportunidad perdida, aunque no sepamos mucho sobre cuál es el mundo que no terminó de nacer. La luna de miel tumultuosa y desesperada de ese diciembre no duró mucho. En rigor, los climas revolucionarios nunca duran mucho: terminan porque hay que “volver al trabajo”, a las rutinas, a los días grises de la normalidad. Lo que diferencia a los estallidos populares entre sí es el paisaje social que los sobrevive. Entre nosotros, la economía comenzó a recuperarse lentamente en 2002, la política atinó a recomponerse y a readaptarse y las asambleas populares no perduraron, aunque generaron, en algunos casos, nuevas formas de asociatividad popular.

Las salidas pacíficas y graduales de las crisis, como fue nuestro caso, tienen el problema de que arrastran la mochila del viejo régimen. No hay un nuevo punto cero, una línea demarcatoria precisa entre lo

nuevo y lo viejo, lo que en la práctica suele lucir como permanencia intocada de todo aquello que esperábamos que la crisis sacara de la escena. Tienen, en cambio, una ventaja que sólo se nota cuando falta: la de impedir el derramamiento de sangre, proteger las instituciones de la libertad y conservar la trama de la comunidad política. Claro que entonces la pregunta es qué ganamos con aquellas jornadas de movilización popular y estremecimiento político; porque la unidad nacional, la democracia y la paz ya existían antes.

Las promesas incumplidas, y acaso incumplibles, de aquellas jornadas son, tal vez, su mejor herencia. La presencia latente de la movilización y la protesta popular han jugado y juegan un enorme papel en nuestra vida política. La democracia ya es inconcebible como un mero agregado de instituciones armoniosas; recupera su condición de contrato político y social, su status como ejercicio vivo y dinámico de la soberanía popular. Con las elecciones periódicas como eje del sistema y con el conflicto social pacífico y legalmente regulado como alimento imprescindible de su legitimidad. Es cierto que en estos años ha cobrado fuerza el fenómeno de las “minorías intensas” que pretenden imponer su verdad y su concepto de la justicia por sobre la voluntad mayoritaria de la sociedad; pero el

camino para la superación de este fenómeno no es la imposición de la “ley y el orden” por medio de la represión, sino el fortalecimiento institucional del país, la capacidad para hacer convivir la legalidad democrática con la expresión de la protesta popular.

Estos cinco años no colmaron las ilusiones de nadie. Muchos de los problemas nacionales y particularmente el más dramático, el de la exclusión de millones de hombres y mujeres, siguen vigentes. Pero la política está otra vez entre nosotros. Envuelta en el ropaje del marketing, los sondeos y los “castings” políticos, pero ya no escondida en la retórica del pensamiento único; centrada en líderes más que en sólidos partidos pero polémica y diferenciada; gradualista pero no resignada. Nadie soñó este país —con su recuperación y su vasta agenda pendiente— en las calles dramáticas de aquel 19 de diciembre. Pero este país es, aunque sea en parte, tributario de aquellos episodios.

* *Politólogo.*

La nueva ley de gravedad

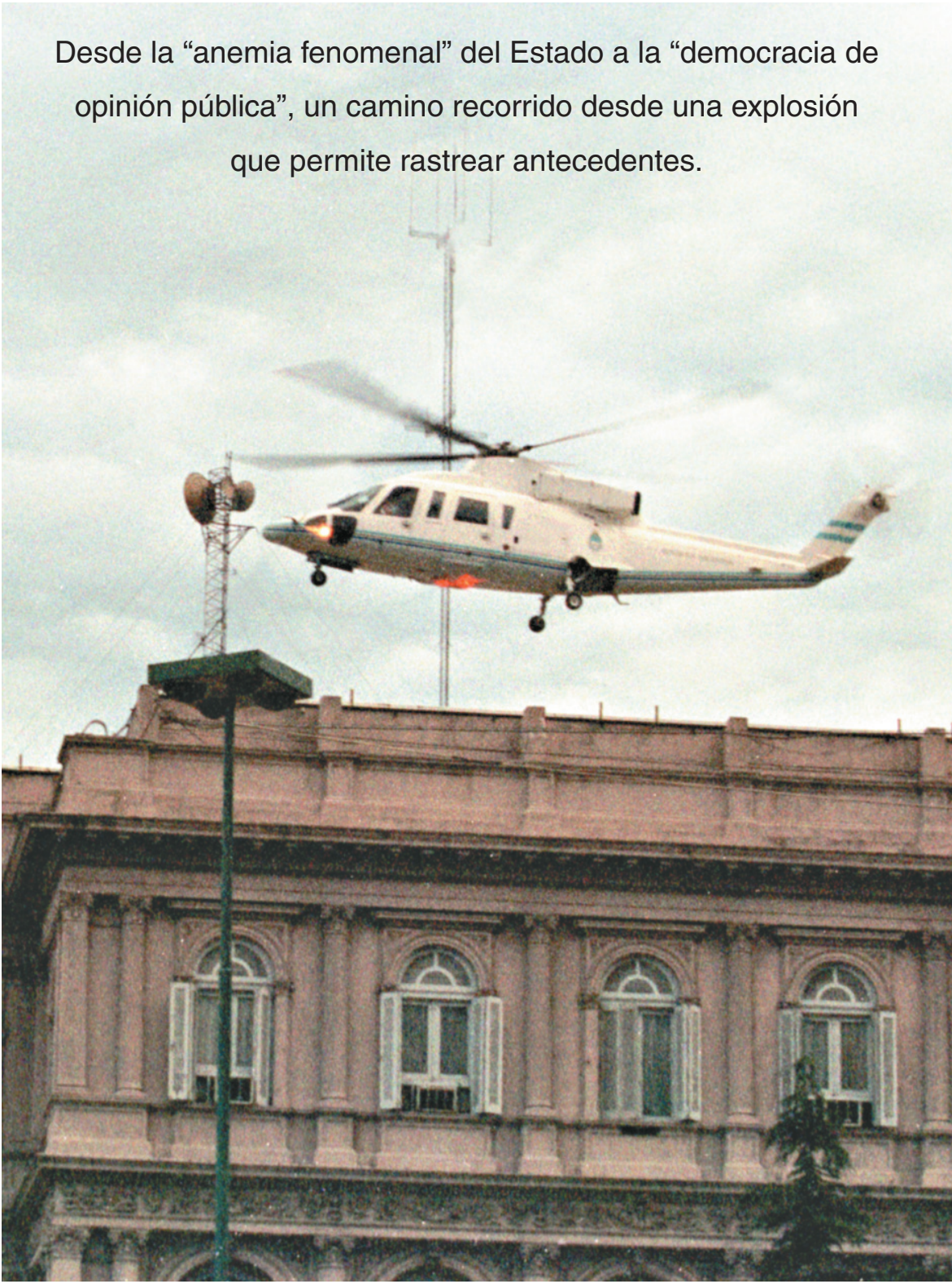
Por Mario Wainfeld

A un lustro de distancia, atando cabos, puede verse lo que era opaco en el mismo momento de los acontecimientos: lo que ocurrió no nació de gajo, el estallido se produjo en un terreno minado durante años. Una confiscación de depósitos bancarios es una brutalidad, aunque tenía un par de antecedentes, en las décadas anteriores. Pero el recorte de salarios estatales y jubilaciones, una flagrante violación de la garantía constitucional sobre la propiedad, era una premonición que fue digerida penosamente, porque “la gente” tenía la guardia baja. Casi dos años llevaban masticando bronca, demasiada energía social encapsulada contra natura para no hacerla primero voto y después cacerolazo, ante una nueva tocada de bolsillo.

El Estado padecía una anemia fenomenal. El gobierno de la Alianza caviló hasta último momento respecto de si podía hacer el censo de 2001. El censo es una imposición legal, datada en el siglo XIX, para un Estado moderno: medir, evaluar como paso previo, irremplazable para la realización de políticas públicas. La organización, la logística, los dineros (más vale) ponían en un brete casi insalvable al Estado que supo ser, antaño, el que garantizó más derechos sociales.

La convertibilidad, una política de Estado nefasta y banal que se convirtió en dogma transpartidario, se prorrogó hasta la parodia. La asfixia que produjo se paliaba mediante parches contradictorios: las provincias emitían sus propias “bonedas”. En un país mestizo y creativo, floreció un híbrido entre bonos y moneda, no necesariamente en proporción fifty-fifty. El Estado nacional también imprimió Lecops para disimular la recesión galopante. “¿Cuánta boneda circula?”, preguntó este cronista a una primera espada del gobierno. La respuesta fue la típica de la época. Nadie sabía. Pero podían ser “en blanco” algo así como 2800 millones de pesos-dólares. Era plata, en una economía exangüe. Pero “en negro” debían haber mil millones más. O un extra, quién sabe. Algunas provincias, amén de emitir papeles que se declamaban equivalentes a dólares sin respaldo, autorizaban billetes mellizos. Todo ese despliegue, apenas para llegar a fin de mes, que no se llegaba. O para pagar, (en cuotas, tarde y mal) los sueldos recortados de estatales o docentes.

Gonzalo Martínez



Desde la “anemia fenomenal” del Estado a la “democracia de opinión pública”, un camino recorrido desde una explosión que permite rastrear antecedentes.

Si el Estado tiraba la toalla, qué decir del gobierno. La coalición originaria se había hecho trizas. Las promesas iniciales y fundantes de transparencia y honestidad, se habían traspapelado en el escándalo de las coimas en el Senado. Las elecciones fueron una advertencia para todo el

sistema político y una catástrofe para el oficialismo. El presidente Fernando de la Rúa y sus adláteres resolvieron negar su existencia.

Una idea básica, seguramente expresada de modo menos tajante, justificaba la hipótesis de supervivencia que, tozudamente, sostenía el Presidente: los límites de un gobernante democrático estaban férreamente fijados por las reglas del mercado, por sus intérpretes y apoderados de los organismos internacionales de crédito y del sistema financiero. En política, en cambio, todo límite era explorable, toda frontera salteable. Eran las leyes económicas (como la gravedad)

las que no podían ser puestas en cuestión por quien no quisiera precipitarse al vacío.

Sabedor de que había multitudes en las calles de todo el país, pero sin escucharlas y mucho menos entenderlas, De la Rúa se calzó los lentes para hablar ante las cámaras y anunciar el estado de sitio.

Ponerse anteojos para representar temple y autoridad es un rebusque de los asesores de imagen, una triquiñuela de campaña. Lo que también ignoraban en la Rosada es que, cuando se gobierna, la campaña es la gestión y no el envase del candidato.

De la Rúa apeló, sucesiva y desesperadamente, a dos resortes básicos del poder: la amenaza y la represión misma. No funcionaron. Las amenazas fueron desoídas, la represión feroz fue respondida a mano desnuda por miles de personas en su mayoría no encuadradas. La ferocidad policial los compelia a retroceder. Se replegaban y caían pero volvían, una y otra vez. Pedían que se fueran todos, a los gritos. Pedían, inconscientemente, más política, más Estado, más y mejor gobierno.

La noción de autoridad había mutado, en los hechos. La gobernabilidad solía leerse como un sistema eléctrico cuyo disyuntor saltaba por exceso de demandas sociales o de alteraciones de la cartilla económica. En esos días, el disyuntor reaccionó de otro modo: fueron la confiscación, la insatisfacción, la violación de los pactos democráticos, la falta de representatividad en acto la que produjo el apagón.

Nadie lo sabía en medio de la brega, envuelto en una crisis que amenazaba llevárselo todo puesto hasta la unidad social, pero brotaban a borbotones nuevas reglas para gobernantes y gobernados. Una democracia de opinión pública, con un peso ponderable de grupos de acción directa. Un prurito social extendido respecto del ejercicio de la potestad represiva del Estado. Una etapa (que dura hasta hoy, vaya a saberse por cuánto tiempo más) en la que el aliento de “la gente” calienta la nuca del gobernante, formateando una democracia de opinión. Muy acelerada, muy encuesta-dependiente, muy colgada de la legitimidad de ejercicio, medida minuto a minuto como los ratings de TV. Y con una sabiduría, no menor, adquirida: las leyes de la representación democrática son también gravitatorias, quien las ignora puede darse de bruces contra el piso.

No es una situación ideal, ninguna lo es. Pero, como en tantas otras cosas reseñadas acá de apuro, es superior a lo que pudo ser. En todo caso, es la argamasa con la que (por ahora, hasta mañana cuando menos) se construye la política.



Por Silvia Bleichmar *

El 20 de diciembre del 2001 más que un cambio político se produjo un rugido del país. El golpe de las cacerolas dio cuenta de la furia, una protesta que puso en evidencia el dolor y enojo, sin palabras aún disponibles.

El balbuceo articuló algunas frases, sin embargo, más de deseo que de propuesta: “Que se vayan todos”, acompañada de “No se va, el Pueblo no se va”, intentó definir quién se adueñaba del país, pero sólo como revelación de profunda indignación frente a la corrupción y la expropiación del sistema político-financiero. Sin embargo, gran parte de los argentinos atribuyó el “fracaso” del modelo fundamentalmente a la corrupción y no al modo mismo de subordinación a los intereses más degradados del capitalismo salvaje, a la profunda inmoralidad que guardaba y a las formas con las cuales el bienestar supuesto de los ’90 se desbarató dejando los muñones de la nación al aire, y con ellos, en carne viva, a un país que a diferencia de los ’70 no basó su aquiescencia por terror sino su convivencia con las migajas de un festín al cual no estuvimos invitados sino recibiendo desde el corredor las sobras aplacatorias que convocaban a la complicidad y la pérdida de identidad.

Más allá de esto, el 20 de diciembre, por primera vez en años, se dio cabida a la ilusión de un país unido a la búsqueda de su propio destino, ilusión que no podía fecundar en la esperanza sin un Proyecto Histórico de referencia, proyecto imposible de realizar sin una revisión profunda no sólo de los enunciados políticos sino incluso teóricos que guiaron a las fuerzas más avanzadas del país a lo largo del siglo XX.

La impotencia es pariente de la intolerancia. Los años posteriores dieron cuenta de lo mejor y lo peor del país: desde el reconocimiento de la imposibilidad de la salvación individual por parte de muchos, hasta el ocultamiento de la riqueza no por pudorosa ética sino por temor al despojo de los excluidos. Desde las tareas solidarias programadas para suplir las carencias de un Estado que no termina aún de reponerse de su devastación, al retiro de su función y a la reducción de mero administrador de las crisis que por sucesivas devienen una sola y gran catástrofe, al odio a los excluidos, y a la resistencia profunda y sostenida por parte de estos de

Más que un cambio, el rugido de un país

El 20 de diciembre dejó su marca en la ilusión de un país unido en la búsqueda de su destino, pero no pudo cuajar en un proyecto histórico de referencia.

evitar su deshumanización.

La impotencia se emparenta con la desesperanza: el cisma que nos partió en dos regiones sociales, económicas y de perspectiva no ha sido indudablemente saldado, ni parece por ahora tener visos de resolverse –al menos en las condiciones habituales que implican la profunda indiferencia de quienes han quedado de un lado de la muralla de acciones y palabras y que piden, tal vez por “fatiga de la compasión” en algunos casos, por egoísmo en otros, que les quiten de la vista la miseria, a los desaharrapados que los someten constantemente a su temor a un destino similar dado que sus condiciones de supervivencia material y simbólica no se encuentran definitivamente establecidas.

El bolsón de fascismo se muestra

acá permanentemente cuando el odio a los excluidos se expresa bajo formas racionalizantes que hacen a muchos eludir la responsabilidad social que implica el concepto de semejante en el marco no sólo de un territorio sino de un proyecto irrealizable sin la participación conjunta. Se muestra también el pliegue del fascismo en el pedido de seguridad y la tolerancia a la impunidad, la naturalización de la muerte de los niños y adolescentes y la convicción resignada respecto al carácter inevitable de la miseria.

Sin embargo, la contrapartida es clara: si bien el reclamo de una justicia saludable no ha logrado aún unificarse, la lucha contra la impunidad es posiblemente uno de los motores más fuertes de las movilizaciones de poblaciones que salen a pedir reparación jurídica antes de terminar de velar a sus muertos, porque saben que no hay descanso en paz si no se mueven en dirección de lograr el reconocimiento del derecho de las víctimas.

Los modos de deshumanización que se ponen de relieve en el intento de someter a una parte del país a su condición simplemente de “superviviente asistido”, con vidas “innecesarias de ser vividas y vidas valiosas perdidas”, encuentran su límite en el florecimiento de acciones creativas y búsquedas nuevas que dan cuenta del deseo profundo de no verse reducido a la animalidad más degradada, sometida a la caridad que sólo conserva la vida y despoja del mundo simbólico que lo transforma en humanizado.

El país se ha tornado complejo: no se ven bordes nítidos salvo a nivel de las estadísticas. El sistema de representaciones que lo sostiene no es homogéneo: no hay dominancias, y la oscilación entre la responsabilidad ética compartida de construir un proyecto común y el deseo de supervivencia individual a cualquier costo es constante. Los argentinos tenemos una falla en la noción del largo plazo, y la inmediatez, producto de una historia

sometida a los vaivenes de los intereses más degradados, obliga constantemente a sostener la cotidianidad bajo modos que son en muchos casos degradantes.

Sin embargo, creo que el 2001 dejó su marca: nos hemos convencido de que nuestros tratos societarios y la tolerancia a la impunidad nos arrastran a un abismo, sin que aún hayamos tomado en nuestras manos de manera unificada el carácter político que esto implica. La corporación política, si bien cerrada aún sobre sus propios intereses, se muestra más sensible a la posibilidad de deponer sus propias ambiciones cuando la marea humana se le lanza encima –como ocurrió en Misiones, donde se produjo, por primera vez, un verdadero proceso de reciudadanización en virtud del carácter político que tomó el reclamo de poner coto a la inmoralidad política–. Y si bien una parte importante de la población ha entrado en cierta rutinización, cierto naturalismo de la injusticia –siendo indudable que éste es el problema mayor que enfrentamos para poder reconstruirmos de manera profunda a partir de las experiencias históricas que arrastramos– aún se alimenta aunque sea de manera fragmentaria y aislada el anhelo de un país más justo y capaz de desplegar, no sólo de sostenerse, en su potencialidad.

** Doctora en Psicoanálisis de la Universidad París VII. Escritora, autora de No me hubiera gustado morir en los ’90, entre otros.*

Por Nicolás Casullo *

En ocasiones, y para el análisis, la encrucijada nacida el 19 y 20 de aquel diciembre se asemeja a esos juegos de espejos de los parques de diversiones: es difícil situar dónde el original y dónde sus simulacros e imágenes. Lo que es, de lo que se pensó que era. La verdad de sus apariencias.

Mirada a la distancia, esa coyuntura puede medirse como un acontecimiento que fracasó en relación al potencial social despertado. Las asambleas se disiparon, la convocatoria a una constituyente de nuevo cuño nunca tuvo lugar, la alianza ideológica entre clases sociales naufragó rápidamente, el fin del peronismo luego de su década y de su modelo depredador de los ’90 no aconteció. Los nuevos partidos de las nuevas políticas aún se aguardan, el vecino del piso de arriba no fue diputado sino que sigue en su empleo, el mundo social alternativo del trueque fue una anécdota que el mercado ni siquiera registró en su dura piel.

Pero a la vez, observadas aquellas secuelas del 2001 desde la misma preocupación de la política, puede afirmarse que esos días todavía respiran agitados por debajo o por detrás de casi todas las lógicas y operatorias que nos circundan: la calle es el sitio del conflicto (mayor o menor), las crisis partidarias se agudizan sin retorno de maneras diversas, el Estado interviniente es reclamado como nunca y de manera a veces insólita por la sociedad postmememista-aliancista-liberal, los representantes partidarios son votados y a la vez desconsiderados permanentemente. Una nueva conciencia en el propio kirchnerismo en primer lugar, y en algunas oposiciones, porta el complicado neoperfil parido por las detonaciones de aquellas jornadas convulsionadas. La política es compleja y nunca binaria como cuentan ciertos manuales teóricos. La sociedad dice muchas cosas distintas para decir en realidad lo mismo. Y cuando se cree que dice lo mismo dice muchas cosas insospechadas donde poco tienen que ver unas de otras.

Dos consecuencias de importancia se desprendieron de aquella hecatombe social, que si bien pueden ser rastreadas como parte de la histórica comunidad argentina, desde diciembre del 2001 se transformaron en “clásicas” de nuestra actualidad. Por una parte la evidencia de que la sociedad cada vez más hace política –se rehace políticamente– ahí donde logra que la vieja y consuetudinaria política no pueda seguir despolitizando a los sujetos. La política nace entonces desde bases ultrafragmentadas, a partir de la revelación –antes que todo– de su propia nadiificación a superar. El acontecimiento diario de “los que no se sienten representados” por la política establecida es la condición para el regreso de la subjetividad política en acto: contra un violador, por un asesinato, un incendio, contra malos servicios, un corte de luz, como respuesta ecologista, en denuncia, en hartazgo: en ausencia.

El 2001 tiene ese brumoso pero al mismo tiempo categórico trazo entre disconformidad e histeria, entre autodefensa y puesta en escena de una sociedad “sacada” de sí misma, pero que también “se saca” de la democracia devenida vacuidad formal. Desde esta perspectiva una corriente de revitalización ciudadana se inscribe hoy como constante diaria –liberadora de domesticaciones sociales que imprime el diseño

Una historia interminable

Mirada a la distancia, dice el autor, se puede leer esa coyuntura como un fracaso, pero esos días respiran debajo de todo el contexto político que nos circunda. Pero el 2001 también signó lo nacional a menudo de manera muy desorientadora.



neoliberal— y pone en jaque el juego de políticas adormecidas institucionalmente.

En segundo lugar, y en relación contradictoria con este mismo orden de cosas, las consecuencias del 2001 trajeron a escena una peligrosa dimensión de sociedad media cualunquista: la reacción atemorizada y espontánea de “la gente” detrás de causas sin ningún perfil político ni ideológico delineado ni claro. La estrechez de mira de cada episodio de inconformismo o rebelión particular, las variables represoras y de linchamiento que aparecen como nuevo sentido común justiciero-mediático, la violencia ciega autoflageladora, el terrorismo lingüístico, la ausencia de horizontes de solidaridad y fraternidad social, el sueño de la sociedad sin “peligrosos sociales”. Lo que podría sintetizarse como típicas, silvestres y variadas formas culturales de derechas, que alimentan aquellas opciones políticas de derecha camufladas detrás de nuevas teorías “republicanas” que publicitan que ya no existen derechas ni izquierdas.

El 2001 signó lo nacional de manera a menudo muy desorientadora. El colapso, la caída de un gobierno democrático, el miedo al fin de un país tuvieron en ese entonces su cántico paradigmático —que se vayan todos— que resume lo equivoco de lidiar con la política. Tal consigna llegó a primera plana, a títulos de libros y películas, a debates, a

seminarios e investigaciones teóricas. Los grupos de izquierda radicalizada lo malinterpretaron linealmente como situación prerrevolucionaria anticapitalista, el progresismo liberal como el fin del peronismo luego de medio siglo, el establishment económico (mientras muchos políticos se escondían debajo de las camas) como el caput definitivo de la política intrusa, interventora, corrupta y populista: debía quedar

un mundo sólo de empleadores y empleados, donde el mercado, el patrón y “yo” resultan los únicos que no roban.

Pero a la vez, en estos últimos años, después del 2001, grandes contingentes reaparecieron socialmente, sindicalmente, y desde infinidad de márgenes, con un reposicionamiento de viejos motivos: lo nacional, lo popular, la autoconsideración, la cultura de la propia identidad y del trabajo. El

reclamo, a veces desmesurado, por un Estado de alta sensibilidad social que reponga racionalidad donde el puro mercado había intentado asesinar a la nación como valor fundante de sentido comunitario. En esa ambigüedad propia de los mundos de masas del tardocapitalismo, en esta ambivalencia del “que se vayan todos”, coagula y flota un tiempo de muy difícil interpretación, pero que diáfananamente pone en

evidencia el conflicto, la necesidad de confrontación democrática, las visibles diferencias de proyectos políticos y económicos, las izquierdas y derechas de un viejo-nuevo relato argentino.

** Profesor de la UBA y la Universidad de Quilmes. Autor, entre otros títulos, de Modernidad y cultura crítica, Pensar entre épocas, El frutero de los ojos radiantes y La cátedra.*

El espíritu de la rebelión

Por Horacio González *

La rebelión es la parte subterránea siempre presente de la política. No hay política, no hay institución, sin la rebelión y el espíritu de la rebelión. En aquellos días de diciembre, hace cinco años, el hombre rebelde se hizo de a tramos, creciendo desde la vereda a la esquina, de la esquina a la avenida próxima y de allí a la plaza. Es la rebelión que prospera, asciende desde un llamado anónimo, quedamente escuchado desde la ventana de casa. Esta forma de la rebelión es más ruidosa que destructiva, más alborotadora que violenta. Es el ciudadano rebelde, vieja figura argentina.

Sin embargo, una profundización de la rebelión la vemos cuando hay corridas sudorosas, adoquines decimonónicos, desafío directo a la fuerza pública. Este modo más dramático está bastante alejado del clásico ciudadano rebelde, que cumple su buena tarea poniendo su conciencia civil en estado de ebullición, como las marchas del lejanísimo octubre de 1945 que estudia Daniel James.

En verdad, es el rebelde de la

“La rebelión es la parte subterránea siempre presente de la política”, dice González, que rastrea la línea que lleva de las rebeldías del 20 de diciembre a algunas actuales.

lucha callejera, de honda y guijarro, el que está siempre en discusión. Lo vemos solo sobre el pavimento, versión del hombre que está solo y espera pero en una calle envuelta de gases y gritos. Es un personaje de la modernidad. No se cesa de debatir sobre él. Está claro que todo ciudadano es un rebelde. Ese es el origen sin misterio de toda forma cívica permanente, cuya memoria alicaída de tanto en tanto es menester recuperar.

¿Y el rebelde que no se sacia si no volteá las vallas? Siempre ofrece una reflexión angustiosa la torsión y continuidad que podría haber entre el rebelde puro y la vida política real, con sus ciudades, ritos e instituciones. ¿El insurgente de torso desnudo, de qué modo se traduciría a todas las esferas posteriores de la verdadera conversación política? Esta es una discusión argentina que recorre todos los estratos de la vida pública. Porque llamamos política a la continuidad afortunada, cuando la hay, de las rebeldías que se subliman luego en una mayor calidad de la imaginación colectiva y democrática. Hago estas rápidas reflexiones porque lo único que

me parece inadecuado en este “difícil tiempo nuevo”, como decía Deodoro Roca, numen de la Reforma Universitaria de 1918, es que se llame delincuentes a los rebeldes. Ciertos o equivocados. Allí, la institución comienza a pensar mal, con descuidada falla, a su otro de la calle, a su imagen inversa detrás de las empalizadas.

** Director de la Biblioteca Nacional. Director de las revistas El ojo mocho y La Biblioteca. Entre otros libros publicó Filosofía de la conspiración, Retórica y locura, para una teoría de la cultura argentina y La crisálida, dialéctica y metamorfosis.*

Hacia

Por Maristella Svampa*

A 5 años de aquellas jornadas de diciembre, me interesaría hacer hincapié en tres cuestiones. La primera se refiere a la necesidad de comprender estos hechos en una dimensión que integra tanto la continuidad como la ruptura. Ciertamente, diciembre de 2001 marcó el final del consenso neoliberal y la apertura de un nuevo escenario político. Sin embargo, es necesario insertar aquellos hechos en un ciclo mayor, aquel que se abre en 1976, con el golpe de Estado militar, el cual produjo de manera violenta una redistribución del poder social, señalando el camino hacia las grandes asimetrías sociales y económicas. Estas asimetrías, que se profundizan durante los '90, con la implementación de una política claramente neoliberal, tienen como respuesta la búsqueda de repertorios no tradicionales de acción colectiva, por parte de los sectores más perjudicados. Los estallidos sociales provinciales y las constantes revueltas de los sindicatos estatales ilustran esta fase. En el año 1996 se registra una inflexión de talla, a partir de la emergencia de un nuevo actor, los desocupados, quienes pese a las dificultades irían ganando en términos de capacidad de acción y de visibilidad política. Diciembre de 2001 es, entonces, tanto la expresión de un proceso de acumulación de luchas en contra de un modelo excluyente, como la emergencia de algo nuevo, marcado por la vuelta de la política a las calles, por la generalización espontánea de otras formas de hacer política, de carácter basista y asambleario. Asimismo, Diciembre de 2001 trajo consigo el fin de la cultura

La importancia de una subjetividad que intenta extenderse a otros sectores y clases, sometidos a la desigualdad y la explotación.



Las fábricas recuperadas: una experiencia emblemática

Por Hugo Calello *

Responder a lo que “hoy queda”, a fines del 2006 en la sociedad argentina del Argentinazo o el Portañazo, no puede reducirse a una simple operación de describir el agotamiento o la expansión de las múltiples explosiones que conmocionaron la tambaleante sociedad política argentina, en el 2001.

Como ya lo afirmamos en un último libro –gestado precisamente por nuestra cátedra de investigación con la protagónica participación de estudiantes de la carrera de Sociología de la UBA (1) Neuhaus, Calello y colaboradores, 2006–, todo movimiento de resistencia debe ser analizado dentro del contexto que se vive en América en los últimos 15 años. Lo sintetizamos en algunas pinceladas.

Los 400 obreros de Zanon, avanzada de más de 200 empresas recuperadas. Los 60 mil habitantes del barrio María Elena del MTD (provincia de Buenos Aires), que expresan la reapropiación territorial, recuperación del espacio desde la autoafirmación de nuevas formas de relaciones sociales de horizontalidad y la voluntad colectiva. Los 15 años de lucha de desocupados y petroleros en el Sur argentino. Los piqueteros de presencia militante. El millón y medio de trabajadores

sin tierra en Brasil. Los nuevos sindicatos que intentan romper los moldes e imponer la lucha política por la civilidad en la Argentina. Los Consejos Populares y el nuevo sindicalismo que en los barrios luchan contra la corrupción de los nuevos partidos y los burócratas en toda la República Bolivariana para intentar construir una nueva hegemonía. Los maestros de Oaxaca que juegan su vida para recuperar el patrimonio de la dignidad y la memoria colectiva. La tremenda potencia de los movimientos étnicos de las naciones originarias, desde Bolivia hasta Ecuador, Perú y México.

De todas maneras, cada movimiento de resistencia no es emergente, un acontecimiento *ex novo*, que surge de lo caótico y azaroso, como afirmó la rimbombante jerga de los augures del posmodernismo. Su potencia está ligada a la forma en que reconstruya y se proyecte socialmente la memoria colectiva, o sea en cómo se incorpore al conflicto de clases y a la lucha contrahegemónica. Por ello, la fábrica recuperada es una experiencia singular, única y emblemática en la Argentina.

Un militante de Zanon nos decía: “La lucha por recuperar la fábrica les cambió la vida a todos los compañeros; nos hizo desarrollar una nueva relación con el trabajo, que ahora lo sentimos nuestro, y con nosotros mismos, dado que ahora pensamos como colectivo afectivo, social y político. Con la comunidad de Neuquén que nos apoyó de entrada, y con la cual seguimos fortaleciendo vínculos y sobre todo nos llevó a reflexionar sobre nuestra historia, pero no sobre la historia que nos obligaron a aprender. Sobre la verdadera historia, aquella que se expresa en nuestra lucha y que se conecta en la más lejana en el tiempo al levantamiento rural de la

Patagonia en 1921, a la Semana Trágica, y al Cordobazo y al Cutralcazo en la más cercana”.

Es cierto que Zanon es una vanguardia emblemática, que más de la mitad del heterogéneo movimiento inicial se redujo a las tradicionales experiencias del cooperativismo, o de talleres de producción por encargo. Pero también es cierto que en muchos de los nucleamientos obreros de fábricas tomadas, la reapropiación del trabajo es la reapropiación del ser social, de una subjetividad transformada, consciente de historicidad. Una subjetividad que intenta extenderse a otros sectores y clases, sometidos a la desigualdad y la explotación, para articular desde la conciencia de la unidad de la clase subalterna un proyecto político que unifique a todos los excluidos y los explotados.

En la sociedad argentina se dan estos movimientos de sentidos diversos. Por un lado, los que se reafirman en su turbulencia agresiva, anárquica de falsas autonomías tribales; y los que, al contrario, pueden ser momentos fugaces de emergencia de un ejercicio revolucionario y emancipador. Como también lo fueron en el pasado, y hoy se restituyen en el presente. Son movimientos que conmocionaron y conmocionan la sociedad política, y dejan su huella en la historia como una latencia en la memoria que puede ser constitutiva en un proceso abierto de expansión y profundización permanente.

Parecería ser que en América latina se marca un nuevo camino para la reconstrucción de la democracia. Confrontando una fuerte contraofensiva de los grupos conservadores, que combinan “maniobras de absorción”, discursos fundamentalistas con prácticas represivas terroristas, por fin los oprimidos comienzan a constituirse en fuerzas sociales y

–progresivamente– políticas en “clase subalterna consciente” de la exclusión y la explotación que, como diría Antonio Gramsci, intenta desde la reforma intelectual y moral la construcción de la civilidad y la democracia.

(1) S. Neuhaus, H. Calello y colaboradores. *Hegemonía y Emancipación*, Ed. Herramienta. Buenos Aires, 2006.

* Sociólogo, profesor de la UBA.

La construcción

Un “no” positivo capaz de impugnar el funcionamiento de la maquinaria del poder y, a la vez, de visibilizar redes de intercambio y politización.

Por el Colectivo Situaciones *

Fechas como éstas reclaman ser interrogadas. Es de suponer que la elaboración de su significado no deba quedar en manos de personas y grupos autoconsiderados “destacados” o “especialistas”, ni resolverse en la intimidad de una “esfera privada”, sino que atañe a una reelaboración pública continua. Y esto concierne, antes que nada, al 19 y 20 de diciembre del 2001 como momento privilegiado para vislumbrar el sinuoso trayecto de las luchas sociales y políticas que reformularon y construyeron un nuevo espacio público, más allá –y haciendo estallar– las fórmulas representativas clásicas (ciertamente agotadas) de lo común mercantilizado y estatalizado.

No se agrega mucho si se recuerda que la historia y el contexto de aquellas jornadas fueron de crisis. Las nociones de reacción y manipulación tan recurrentes como interpretaciones de aquel diciembre olvidan el carácter anticipatorio y radicalizador del protagonismo social que se venía desarrollando

un nuevo paradigma de la política

Diciembre de 2001

dentro de un ciclo

que comenzó con

la última dictadura.

La vuelta de la

política a las calles

y el fin de la cultura

del miedo.

Las asambleas,

desde Cutral-Có

hasta

Gualeguaychú. El

desafío de pensar

un nuevo

paradigma de

la política.



Gustavo Mujica

del miedo que había instalado el terrorismo de Estado, liberando nuevas energías sociales para la confrontación con el poder y la búsqueda de solidaridades sociales.

Una segunda cuestión se refiere a las movilizaciones realizadas durante el año 2002, que produjeron una profundización en la crisis de hegemonía de los sectores dominantes. Factores diversos explican el paulatino cierre de esta situación extraordinaria.

Entre ellos, recordemos que en junio de 2002, en medio de una gran debilidad, el gobierno apeló a una estrategia abiertamente represiva. Así, los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki mostraron de manera trágica la centralidad de las organizaciones piqueteras, recordando tanto la vulnerabilidad del actor movilizadado como el contexto de asimetría de fuerzas. Por otro lado, pese a su productividad política, la consigna “que se

vayan todos”, por su mismo carácter destituyente, fue mostrando limitaciones, lo que con el correr del año y con el declive progresivo de las movilizaciones se tradujo por la disolución de una expectativa de recomposición política “desde abajo”, al tiempo que favoreció el retorno del sistema institucional, detrás de los viejos partidos políticos y la instalación de una demanda de normalidad en vastos sectores de la sociedad. En tercer lugar, la masificación

de los planes sociales y el arribo de Néstor Kirchner al gobierno abrirían una nueva etapa, capaz de relegitimar el poder y asegurar márgenes importantes de gobernabilidad, combinando la asunción de una retórica anti-neoliberal con la normalización de las orientaciones centrales del modelo neoliberal, en el marco de un nuevo escenario regional.

Tercera y última cuestión, que atañe a las subjetividades políticas. En primer lugar, al calor de las movilizaciones se produjeron cruces de experiencias entre diferentes sectores sociales, que desembocaron en nuevas modelos de militancia. Al militante social, ilustrado por los piqueteros, se sumarían nuevas figuras, que incluyen desde el activismo cultural hasta las recientes expresiones del activismo gremial (muchos de los cuales hicieron su primera experiencia en las asambleas barriales de 2002). En este proceso de reconfiguración, la generalización de la forma “asamblea” ocupará un lugar mayor. Lejos de ser una creación de las multitudes porteñas, la forma “asamblea”, con las características actuales, esto es, como espacio político extraordinario en la cual convergen desobediencia civil y democracia directa, aparece por primera vez en 1996, en la pueblada neuquina de Cutral-Có. El devenir de la democracia asamblearia se prolonga, en su dimensión más ligada a la práctica cotidiana, en las organizaciones piqueteras, con diferentes niveles de desarrollo. Diciembre de 2001 marca una fuerte inflexión, a partir de la generalización de la forma asamblea en su expresión extraordinaria, sobre todo en los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Pero la forma asamblea deviene cada vez más un paradigma irresistible (esto es,

cuyo avance no se puede detener), como lo muestra el caso de Esquel, en la provincia de Chubut, donde se organiza la primera asamblea ciudadana en contra de la minería tóxica, que luego adoptarán otras multisectoriales, en San Juan, Río Negro, Catamarca y La Rioja. En fin, los vecinos de Gualeguaychú vendrían a confirmar la centralidad de la forma asamblea como paradigma de la política desde abajo.

Cierto es que, desde el campo político y también académico, muchos se resisten a comprender la dimensión de estos cambios. Creen que la integración de nuevas formas de participación dentro de los moldes del actual régimen de dominación (una democracia decisionista y delegativa) es algo no sólo posible, como lo muestran tantas organizaciones sociales, sino también deseable para la gobernabilidad del país. Otros continúan leyendo el decálogo de la democracia representativa, como si sólo se tratara de respetar canales de mediación o procedimientos. A diferencia de estas visiones normalizadoras y normativas, nosotros creemos que el gran desafío es pensar abierta y desprejuiciadamente la potencialidad instituyente del nuevo paradigma de la política.

** Socióloga.*

de un poder destituyente

en los barrios y que irrumpió a los ojos del mundo en aquellas fechas: desde los escraches contra los genocidas a los movimientos y cortes de ruta de los desocupados de todo el país, pasando por las primeras ocupaciones de fábricas hasta la maduración de una conciencia antirrepresiva y experimental que primero desestructuró el absurdo intento de estado de sitio y luego se organizó en asambleas vecinales.

Que el llamado “modelo neoliberal” estaba ya agotado y que el propio sistema político estaba completamente ciego, sordo y mudo a las demandas de cambio constituyó la parte menor de la novedad. La mayor fue, sin dudas, el alto nivel de autoorganización de quienes tomaron a su cargo las protestas y las consignas de un nuevo tipo de insurrección urbana (en serie con otras de América latina: de Caracas a Quito, pasando por La Paz y Oaxaca), totalmente desarrollada por fuera de las coordenadas políticas tradicionales. Lo que quedó como marca indeleble fue la construcción de un poder

destituyente, de un rechazo que abrió a nuevas derivas políticas: fue un “no” positivo capaz de impugnar el funcionamiento de la maquinaria del poder y, a la vez, de visibilizar redes de intercambio y politización. Hoy vemos la permanencia de estas innovaciones políticas en las nuevas luchas gremiales, en las formas asamblearias de la protesta social (Gualeguaychú, familiares de Cromañón), en la resistencia cotidiana desde la precarización de las vidas y en la organización antirracista de los migrantes contra la explotación y el abuso policial.

Más allá de la desilusión de quienes creían ver de cerca la llegada al poder o de los vaticinios más generalizados de una catástrofe rápida y definitiva, las formas organizativas ensayadas durante la crisis están hoy reelaborándose, al mismo tiempo que la mediatización actual sólo se hace lugar para reflejar una nueva ola de consumismo.

Desde entonces también quedó abierto el 19 y 20 en la disputa por cómo operar su traducción institucional, algo que el actual

gobierno parece haber comprendido rápidamente, aunque su resolución esté plagada de astucias y chicanas, antes que de un auténtico compromiso de fondo con las dinámicas desde entonces desplegadas. Por otro lado, una nueva perspectiva analítica tomó fuerza desde el 2001: el pensamiento y la investigación en y desde abajo, abriendo una batalla interpretativa y de lenguajes para narrar lo que pasó y para presentar el sentido de las luchas actuales. ¿Qué quedó entonces? Una sociabilidad lo suficientemente madura como para comprender que tras la proliferación de las imágenes y los discursos de la normalización, opera un fondo permanente de excepcionalidad (que incluye el excedente no institucionalizable del 19 y 20) que reclama profundizar las invenciones políticas, eludiendo tanto las recetas conocidas de las izquierdas convencionales como, y sobre todo, el retorno de las derechas más reaccionarias.

** Colectivo de investigación militante.*

Por Adriana Meyer

Es posible que Fernando de la Rúa siga sumando procesamiento por casos de corrupción, pero por la represión que ordenó horas antes de subirse al helicóptero no tendrá cuentas pendientes con la Justicia. En la causa en la que se investiga la muerte de cinco manifestantes y las lesiones de más de 200, durante la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, el ex presidente goza de una falta de mérito. Quienes afrontarán un juicio oral por homicidio son Enrique Mathov y Rubén Santos, secretario de Seguridad y jefe de la Policía Federal, respectivamente, del gobierno de la Alianza. A cinco años de aquel levantamiento y su sangrienta respuesta, los tribunales orales federales preparan tres juicios a ocho policías, pero sólo uno de ellos está detenido. El desmembramiento inicial del expediente que hizo la jueza federal María Servini de Cubría profundizó los efectos nocivos del paso del tiempo en la investigación, a los que se suman los factores políticos, burocráticos y legales que produjeron este pobre resultado y la consecuente sensación de impunidad de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes.

“Pasaron cinco años, pero en la causa es como si hubieran pasado tres semanas, las pruebas son las mismas, la reconstrucción no sirvió para nada, aunque ya había videos y testigos. Esperaba que el juicio fuera más pronto, pero ahora temo que en un año electoral se demore para que la gente no se acuerde que salió a combatir un modelo”, expresó a **Página/12** Martín Galli, que sigue llevando bajo sus rastas una bala de aquella jornada.

El día después de la feroz represión —que sofocó la ira popular contra el agonizante gobierno con gases, caballos, balas de goma y de plomo— un grupo de diputados y de abogados de derechos humanos hicieron la denuncia que recayó en el juzgado de Servini de Cubría. La magistrada decidió dividir la causa para quedarse con la investigación de las responsabilidades políticas, delegando en los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers lo referido a los hechos puntuales.

Presidente ausente

Si el paso del tiempo hizo que apenas quedase un policía preso, no fue sólo por la gran dimensión de un caso con muchos imputados y querellantes, sino también porque algunos acusados se mostraron reticentes. De hecho, De la Rúa faltó tres veces a su declaración indagatoria. En principio la jueza sólo le preguntó por las lesiones que sufrieron las Madres de Plaza de Mayo cuando fueron atacadas por la policía montada y terminaron bajo las patas de los caballos. Tuvo que intervenir la Cámara Federal para que lo interrogara por los cinco asesinatos. En su declaración, el ex presidente sugirió que las muertes fueron parte de un operativo para desplazarlo del gobierno. “No vi televisión en todo el día ni tampoco me asomé al ventanal de Casa de Gobierno, estaba absorbido por la crisis institucional”, explicó en el tercer piso de los tribunales federales de Retiro. Y afirmó que la policía no respondía al “poder político”, sino a las órdenes de la jueza Servini, que lo miraba atónita.

Al parecer sus palabras fueron



El principal Víctor Belloni es el único policía detenido en la causa. Fue identificado a partir de la publicación de esta foto en **Página/12**, que fue aportada como prueba.

De la Rúa a salvo y un solo policía preso

El ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos serían juzgados por homicidio culposos, un delito excarcelable. El proceso no tiene fecha. Habrá otros tres juicios a ocho policías.

efectivas, porque la Cámara confirmó la falta de mérito que le dictó la magistrada en el entendimiento de que “no está probado que De la Rúa estuviera al tanto” de lo que pasaba en las calles, según recordó ante **Página/12** una alta fuente judicial que conoce bien el megaexpediente. Entonces, si la policía no actuó bajo su mando lo hizo de manera autónoma, lo cual es aún más alarmante. Fiscales y querellantes explicaron en sus respectivas elevaciones a juicio que el ex presidente ordenó reprimir para obtener “aire” y así poder negociar con la oposición.

Estado de sitio

Tras el levantamiento de diciembre de 2001 hubo 200 detenidos en todo el país, pero el decreto que firmó Fernando de la Rúa el jueves 19 sólo tenía 29 nombres. Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers insistieron en varias oportunidades para acusar al ex presidente por abuso de autoridad, porque sostenían que ese decreto era despropósito, vago y ambiguo en sus fundamentos y, por lo tanto, las detenciones habían sido arbitrarias. Pero no tuvieron acogida. La jueza María Servini de Cubría ni siquiera se expidió sobre el asunto. Ante ella, De la Rúa había asegurado que confiaban en el “efecto disuasivo” de la medida, que terminó generando todo lo contrario. En la causa, el ex secretario de Inteligencia Carlos Becerra y el ex jefe de Gabinete Christian Colombo expresaron que el estado de sitio había sido pedido por varios gobernadores.

Más allá de una serie de recursos pendientes, es probable que esa falta de mérito se transforme en un sobreseimiento. Aunque resulta llamativo que Servini aún no lo haya resuelto, como tampoco lo hizo respecto de la decena de ex jefes de la Federal que están en la misma situación indefinida, es decir, vinculados con el caso sin procesamiento, entre ellos Jorge “El Fino” Palacios y Ernesto Weber.

Cuatro a juicio

Así como es casi un hecho que el ex presidente logrará evitar sentarse en el banquillo de los acusados, quienes fueron su secretario de Seguridad y su jefe de Policía Federal no pudieron zafar. El fallecido ministro del Interior Ramón Mestre no irá a juicio por razones obvias, pero los fiscales Comparatore y Evers ya pidieron la elevación a proceso oral y público de Mathov, Santos y los ex jefes policiales Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero por homicidio culposos en cinco oportunidades, lesiones culposas reiteradas en 116 oportunidades, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

La querella representada por el abogado Rodolfo Yanzón había solicitado que fueran acusados por homicidio doloso, es decir, intencional. “La decisión de haber desplegado un operativo de tales dimensiones recayó en el poder político, y la policía lo puso en práctica. Esa represión de carácter ilegal desató una carcería humana que produjo cinco muertes y la tentativa de dar muerte a cientos de personas con el único objetivo de dar oxígeno a un go-

bierno languideciente”, argumentó el letrado en su pedido. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también parte de la querella, concordó con los fiscales en cuanto al carácter “culposos” de los delitos cometidos por los funcionarios. En un intento para evitar ir a juicio, Mathov recusó a Servini para separarla del caso, pero fracasó.

“El 19 anduve camuflado por la plaza y no me pasó nada. Lamento que el 20 no se pudo usar esa técnica”, dijo Santos en su indagatoria. Un rasgo común de las declaraciones de los funcionarios políticos es la mención de “excesos” cometidos por sus subordinados, en un intento de deslindar responsabilidades en ellos.

No hubo “excesos”

De los más de 200 lesionados, ochenta fueron heridos con munición de guerra. La edad promedio de los muertos es 32 años y fueron baleados en el tórax, salvo uno que recibió un disparo en la cabeza. Los fiscales comprobaron la utilización de cartuchos rojos —es decir, con perdigones de plomo, en lugar de verdes con los de goma o “antitumulto”— en las escopetas Itaka que usó la policía durante la represión. Ellos también dividieron la investigación en tres partes: el asesinato de Alberto Márquez, de 57 años, que cayó en la avenida 9 de Julio, muy cerca del Obelisco, y donde fueron heridos Galli y Paula Simonetti, entre otros; el de Gustavo Benedetto, 23 años, repositor de supermercado, en Avenida de Mayo y Chacabuco, frente al banco HSBC, y los asesinatos de Carlos “Petete” Almirón (23, estudiante, militante y techista ocasional), Gastón Riva (31, motoquero) y Diego Lamagna (27, deportista), en Avenida de Mayo y 9 de Julio.

Por el caso de Márquez están procesados los policías Orlando Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa y Roberto Juárez, todos de la división Asuntos Internos de la Federal. Y el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 prepara el juicio oral en el que serán juzgados por el homicidio de Márquez, que era trabajador de seguros y militante justicialista de San Martín. Estos uniformados estuvieron detenidos, pero salieron en libertad por la demora en la implementación del juicio.

El principal Víctor Belloni es el único policía detenido en la megacausa. En principio fue acusado por la muerte de Almirón, Lamagna y Riva, pero quedó con falta de mérito por esos hechos y enfrentará el juicio oral en el TOF 1 por la tentativa de homicidio de dos manifestantes, Marcelo Dorado y Sergio Sánchez. Fue identificado en fotos y videos disparando contra la multitud (*ver foto*). Ayer la Cámara Federal prorrogó su prisión preventiva y recalificó el hecho como “doble tentativa de homicidio agravado”, al considerar que era un “experimentado tirador” y el de más alto rango del escuadrón ubicado en aquella esquina.

El caso de Benedetto llegó a la Corte Suprema, que anuló el procesamiento del coronel retirado Jorge Varando por su homicidio. Este ex militar era jefe de seguridad del HSBC y disparó desde el interior del edificio junto a varios policías. Es el único que tiene fecha, en abril, para ir a juicio ante Norberto Oyabide, pero por un delito menor: abuso de armas. “Tiren, no sean cagones”, fue la arenga elegida por Varando aquel día.

Esta dispersión podría resolverse si los tribunales orales que funcionan en Comodoro Py se ponen de acuerdo y unifican los procesos. Y más allá de la frustración en las expectativas de fiscales y querellantes, esas partes admiten que este es uno de los pocos procesos en los que se investigaron responsabilidades políticas, aunque hayan quedado demasiado diluidas.

Los muertos por la represión en todo el país

Treinta y siete personas murieron en todo el país durante la represión con que el ex presidente Fernando de la Rúa se despidió del poder, el 19, 20 y 21 de diciembre. Esa es la cifra final, algo más abultada que las 29 registradas inicialmente.

Graciela Acosta, 35 años, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe.
Carlos Almirón, 24, Capital Federal.
Ramón Arapi, 22, Corrientes.
Rubén Aredes, 24, Buenos Aires.
Elvira Avaca, 46, Cipolletti, Río Negro, “frente a un supermercado”.
Diego Avila.
Gustavo Benedetto, 30, Capital Federal.
Walter Campos, 16, Rosario.
Jorge Cárdenas, Capital Federal.
Juan Delgado, 27, Rosario.
Víctor Enrique, 20.
Luis Fernández, 27, Tucumán.
Sergio Miguel Ferreyra, Córdoba.
Julio Flores, 15, Merlo.
Yanina García, 18, Rosario.
Ariel González, 24, Pilar.
Roberto Gramajo, 21, Claypole.
Pablo Guías, Almirante Brown.
Romina Iturain, 15, Paraná.
Diego Lamagna, 27, Capital Federal.
Cristian Legembre, Castelar.
Claudio Lepretti, 38, Rosario.
Alberto Márquez, 57, Capital Federal.
David Moreno, 13, Córdoba.
Miguel Pacini, 15, Santa Fe.
Rosa Paniagua, 13, Paraná.
Sergio Pedemera, 16, Córdoba.
Rubén Pereyra, 20, Rosario.
Damián Ramírez, 14, Gregorio de Laferrère.
Sandra Ríos.
Gastón Riva, 31, Capital Federal.
José Rodríguez, Paraná, Entre Ríos.
Mariela Rosales.
Ariel Salas, 16, Gregorio de Laferrère.
Juan Torres, Corrientes.
José Vega, 19, Moreno.
Ricardo Villalba, 23, Rosario.